

ARGUMENTOS

para el cambio



N° 123

Octubre 2026

Santiago, Chile

CHILE HOY: DEMOCRACIA, RESISTENCIAS Y DISPUTAS DE HORIZONTE

I. EL PAÍS BULLE

Chile está inquieto. Crece la preocupación por los efectos del programa del gobierno de José Antonio Kast en las condiciones de vida de las personas: el desempleo se mantiene alto —afecta especialmente a mujeres y jóvenes— y los ingresos familiares no alcanzan para llegar a fin de mes en la mayoría de los hogares.

A eso se suma la desconfianza. El gobierno propuso una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública que concentra atribuciones excesivas en el Ejecutivo, debilitando los contrapesos entre poderes del Estado y el respeto a derechos reconocidos. El cuestionamiento ha sido transversal.

Las dudas se extienden también a la política exterior. En septiembre de 2026, el Foro de Madrid reunió en Santiago a partidos de ultraderecha de todo el continente. Ahí fuimos testigos de las “incivilizaciones” de Javier Milei hacia la historia política chilena, de aspiraciones sobre el Estrecho de Magallanes y de una lógica de subordinación a sus propios intereses. La adhesión al “Escudo de las Américas” —articulado en torno a la estrategia de Donald Trump— plantea riesgos reales para la soberanía de Chile en política exterior, en el manejo de sus recursos naturales y en su autonomía económica.



PUBLICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER

123

Este clima de incertidumbre tiene consecuencias concretas: lleva a la gente a retraerse, a no creer en la acción colectiva, a dudar de que la educación y el trabajo sean caminos ciertos de integración social. En ese vacío, el narcotráfico ofrece alternativas donde el Estado ha abandonado la prevención.

Chile resiste

El país no está quieto. Gracias a décadas de reconstrucción democrática tras la dictadura, existen fuerzas que han puesto límites a las derivas autoritarias. Y es que la democracia, con todas sus imperfecciones, crea espacios para la deliberación, la negociación y el aprendizaje colectivo. Permite corregir errores con el tiempo. Y eso se nota: la caída sostenida en la aprobación del gobierno, la acción coordinada de expertos, juristas y economistas, y la revitalización de las organizaciones sociales han funcionado como un dique efectivo. Se trata de autoridades públicas, instituciones autónomas, juristas, centros de estudio, líderes sociales y organizaciones ciudadanas que —con argumentos, movilizaciones y propuestas— se han opuesto a los retrocesos. Estas fuerzas resisten también a centros de poder nacionales e internacionales que pretenden imponer sus visiones del mundo como si fueran verdades técnicas irrefutables. La implementación del programa ha revelado, además, la distancia entre ideología y realidad. El gobierno subestimó cuánto ha cambiado la sociedad chilena, y subestimó también la complejidad de gobernar un Estado moderno.

La resistencia desde los territorios: alcaldes/as y organizaciones de mujeres

Dentro de las fuerzas de resistencia destaca especialmente la oposición de los alcaldes y de las organizaciones de mujeres. Los municipios son el Estado más cercano a la gente: es allí donde los derechos sociales se concretan en atención de salud, apoyos para el cuidado, infraestructura y acompañamiento social. Los recortes presupuestarios debilitan esa capacidad, reduciendo los programas y los equipos que permiten ejercer esos derechos.

Alcaldes/as de ocho comunas del sector poniente de la Región Metropolitana exigieron retomar el Tren Santiago–Melipilla y establecer fechas de ejecución (declaración conjunta, La Tercera, 28 de septiembre de 2026). La Asociación Chilena de Municipalidades demandó reponer los fondos de salud primaria para mantener las horas de atención. Autoridades de comunas vulnerables reclamaron reanudar obras paralizadas y garantizar la continuidad de los progra-

mas sociales. Estas movilizaciones articulan necesidades ciudadanas concretas y disputan las prioridades del gasto público, poniendo en el centro la capacidad del Estado para garantizar derechos y sostener el bienestar en los territorios.

II. LA BATALLA CULTURAL: GÉNERO Y ESTADO DE BIENESTAR

La igualdad de género y el reconocimiento de las diversidades sexo-genéricas ocupan un lugar central en la batalla cultural emprendida por la ultraderecha. Su estrategia consiste en negar las desigualdades estructurales de género, volver a un discurso supuestamente neutro y universal, y ocultar las formas concretas de existencia de las mujeres. Este discurso desconoce los cambios reales que han vivido las familias chilenas: el aumento de los hogares monoparentales, el crecimiento de la jefatura femenina, los avances en autonomía económica y reproductiva a los que las mujeres no están dispuestas a renunciar.

Kast prometió en campaña que no daría la “batalla cultural” y que se concentraría en las emergencias de seguridad y economía. Sin embargo, sus propuestas trascienden con creces esos objetivos. En la VII Cumbre Transatlántica de Bruselas (febrero de 2026), siendo aún presidente electo, Kast situó explícitamente su proyecto en una “batalla cultural, política y moral” contra los “ismos” de las izquierdas, entre ellos el “feminismo ideológico” y el “indigenismo radical”. En su discurso inaugural, afirmó que gobernaría “para todos”, —pero ese “para todos” no incluyó el reconocimiento de ninguna desigualdad: ni de género, ni de clase, ni de etnia.

En la Cuenta Pública del 1 de junio de 2026, Kast declaró que su gobierno está guiado por “principios que no son consignas, sino convicciones”: la libertad, el amor por la vida y la familia, y el valor del esfuerzo y del mérito. La tríada familia—mérito—orden sustituyó los ejes de derechos, igualdad y autonomía que habían articulado el discurso de género de los gobiernos anteriores. Las demandas de igualdad pasan a presentarse como “ideológicas”, mientras que las políticas de género se encuadran como amenazas al orden, no como derechos.

Una doble privatización

El programa del gobierno busca dos cosas a la vez: liberar los mercados de la regulación estatal, y trasladar a la familia las funciones que el Estado deja de

cumplir. El resultado es una doble privatización: la economía hacia los mercados y el cuidado hacia los hogares.

Cuando el Estado reduce su participación en el bienestar social, las responsabilidades de cuidado no desaparecen: se trasladan a los hogares. Y dentro de los hogares, son mayoritariamente las mujeres quienes las absorben. Aumenta el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Se reduce la autonomía económica de las mujeres. Se dificulta su participación en el mercado laboral, en la formación, en la vida pública. Sin políticas activas, las desigualdades no se corrigen solas: se reproducen y se profundizan.

Las dimensiones del desmantelamiento

El desmantelamiento no opera en un solo plano. Actúa simultáneamente en cuatro dimensiones que se refuerzan mutuamente: el discurso, la elaboración de normas que crean barreras para acceder a los derechos, y el recorte de presupuestos y el debilitamiento de la institucionalidad de género.

Estas dimensiones se articulan en una misma lógica: el discurso reemplaza los derechos por emergencia, familia y mérito, de modo que las demandas feministas quedan descalificadas como “ideología” antes de llegar al debate. La normativa traduce ese discurso en barreras concretas: obstáculos al aborto legal, vaciamiento de la Ley de Violencia, por ejemplo.

Los despidos de equipos especializados destruyen la memoria institucional acumulada durante años. Estos equipos saben cómo diseñar e implementar políticas de igualdad. Saben cómo articular la transversalización entre ministerios. Saben cómo relacionarse con las organizaciones de mujeres en los territorios, cómo construir la confianza que las comunidades han tardado años en desarrollar hacia el Estado. La eliminación de los mecanismos de transversalización de género vacía de contenido las estructuras que permanecen; y el cierre de programas borra los espacios desde donde las mujeres articulaban demandas y construían autonomía.

El gobierno actual reduce unidades especializadas en género, modifica los marcos de política y elimina los mecanismos de monitoreo. El resultado es una transición desde una institucionalidad transversal a un ministerio sectorial con mandato acotado, —y con un liderazgo ideológicamente contrario a los derechos que le corresponde promover.

Lo que estas cuatro dimensiones revelan, miradas juntas, es que no se trata de ajustes técnicos ni de recortes de emergencia: es una reconfiguración del Estado que transfiere costos desde las instituciones públicas hacia los hogares, y, dentro de los hogares, hacia las mujeres. Cada dimensión refuerza a las otras. El discurso hace invisible la desigualdad; la normativa la reproduce; el presupuesto la profundiza; la institucionalidad la vuelve estructural.

III. LA RESPUESTA FEMINISTA: MÚLTIPLE, ORGANIZADA Y SOSTENIDA

Frente al programa del gobierno de Kast, el campo feminista no esperó. Su respuesta fue inmediata, múltiple y estratégica: no se limitó a la denuncia, sino que construyó desde el primer momento líneas de acción paralelas que se fueron reforzando entre sí.

Primera línea — nombrar lo que el gobierno ocultaba. Hacer visible que el “gobierno de emergencia” era también un gobierno de agenda valórica fue la condición de todo lo demás. Sin ese diagnóstico compartido, cada medida podría haberse presentado como ajuste técnico. Nombrarlo fue un acto político en sí mismo.

Segunda línea — salir a la calle, masiva e interseccionalmente. Las movilizaciones bajo el lema “Ni un paso atrás, cien pasos adelante” convocaron a mujeres, disidencias, pueblos indígenas y clase trabajadora. Esa amplitud expresaba una concepción política que trasciende las demandas de género para articular un proyecto de mayor alcance. Colectivos y organizaciones fortalecieron sus redes internas —espacios de debate, seminarios, talleres, instancias de formación y contención— para sostener la capacidad de respuesta en el tiempo.

Tercera línea — producir conocimiento propio como forma de resistencia. La plataforma Nada Sin Nosotras —integrada por la Corporación Humanas, el Centro de Estudios de la Mujer y el Observatorio de Género y Equidad— parte de una premisa explícita: en tiempos de desinformación, producir información verificada es un acto político. Los datos desagregados por sexo, el monitoreo de los recortes y la documentación de sus efectos concretos mantienen visible lo que el discurso oficial invisibiliza. Su lema lo condensa sin rodeos: “informar es un superpoder”.

Cuarta línea — usar la memoria histórica como argumento político. La carta pública del MEMCH de mayo de 2026 —que emula deliberadamente la carta de Elena Caffarena de 1935— establece una continuidad de más de noventa años que hace difícil presentar el feminismo como moda ideológica importada. El movimiento ya resistió la dictadura. Sabe cómo hacerlo.

Quinta línea — activar los marcos internacionales de derechos. La Corporación Humanas documentó los retrocesos del gobierno ante el Comité CEDAW, la CIDH y las relatorías especiales de la ONU, trasladando la disputa al plano internacional, —donde el gobierno tiene menor capacidad de presentar sus decisiones como puramente técnicas o soberanas. El movimiento feminista chileno se conectó además con redes latinoamericanas y globales para activar solidaridades que cruzan fronteras.

La Central Unitarias de Trabajadores (CUT) y las organizaciones de trabajadoras respondieron a quienes presentan al feminismo como una agenda de élite, las demandas de las mujeres son demandas materiales y concretas de quienes trabajan.

Lo que une estas estrategias es una convicción compartida: la batalla cultural no se gana solo en el Congreso ni en los tribunales. Se gana también en las calles, en las redes, en los archivos, en los vínculos entre mujeres y en la memoria de lo que costó conquistar lo que hoy se intenta dismantelar.

V. DE LAS PROTESTAS DISPERSAS A LA RESISTENCIA ARTICULADA

Miradas desde adentro, cada acción de resistencia responde a su propia urgencia: las trabajadoras de PRODEMU despedidas, las mujeres de Quintero midiendo el aire con sensores caseros, los alcaldes del poniente sin tren, las parlamentarias citando datos de organizaciones feministas en el Congreso. Una marcha aquí, una denuncia ante la CIDH allá, una carta del MEMCH, una toma simbólica en el trazado de una obra paralizada.

Lo que el análisis permite ver —y que desde cada acción no siempre es visible— es que esas protestas dispersas fueron reconociéndose entre sí.

Fueron viéndose como parte de lo mismo. La mujer rural sin agua, la jefa de hogar sin CESFAM, la temporera expuesta a agroquímicos, la funcionaria despedida con años de memoria institucional: distintas expresiones de una misma lógica que transfiere costos desde el Estado hacia los cuerpos y el tiempo de las mujeres.

Las resistencias son reales y tienen densidad organizativa. El desafío que enfrentan es formidable: cómo reconstruir lo social y lo político que el neoliberalismo ha destruido, mientras se resiste activamente al desmantelamiento en curso. Las dos cosas al mismo tiempo, con los mismos recursos escasos.

Construir organización, redes de solidaridad, capacidades de monitoreo y producción de conocimiento propio no es solo resistir en el presente: es preparar el futuro. Es acumular la capacidad institucional, técnica y política que hará posible —cuando las condiciones cambien— reconstruir más rápido y más sólidamente lo que hoy se destruye.



SABÍAS QUE....

- El Estado dejó de recibir nuevas participantes en el Programa Mujeres Rurales. El 1 de junio de 2026, la Dirección Nacional de INDAP informó por oficio a la Fundación PRODEMU que este año no habría nuevos ingresos. No hubo mesa de trabajo previa, ni consulta a las organizaciones campesinas ni plan de transición. La decisión interrumpe 34 años de apoyo a mujeres campesinas y pequeñas productoras en todas las regiones del país. Pese a que la evaluación del INDAP mostró que el 68,1% de las participantes aumentó sus ingresos por ventas y que la proporción con producción activa pasó del 33,4% al 89,6%. (El Mostrador, 21-22 julio de 2026.)
- La directora ejecutiva de Prodemu pidió retirar a Simone de Beauvoir, feminista francesa, de la selección de autoras destacadas. Jessica Flores solicitó excluirla de la selección que la fundación difundiría en octubre en sus redes sociales. La fundación aclaró luego que sus libros siguen disponibles en la Biblioteca de las Mujeres. (The Clinic, 29 de septiembre de 2026.)
- casi cuatro de cada diez votantes de Kast cambiarían hoy su voto, y la mayoría son mujeres. Según la encuesta Chile Actual de la Fundación Nodo XXI (septiembre de 2026), el 38,2 % de quienes votaron por José Antonio Kast se arrepiente, y el 61 % de ese grupo son mujeres.
- dos de cada tres personas encuestadas rechazan suspender la Ley Karin. Según la encuesta Chile Actual de la Fundación Nodo XXI (septiembre de 2026), el 66 % está en desacuerdo con suspender por cinco años la ley que previene y sanciona el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo; solo el 17 % está de acuerdo. La propuesta, impulsada por parlamentarios libertarios, se funda en que la Dirección del Trabajo no tendría capacidad para procesar todas las denuncias. (Fundación Nodo XXI, encuesta Chile Actual, tercera medición, septiembre de 2026.)

En diversas reuniones con las organizaciones de mujeres en distintas regiones del país, los temas de pobreza y miedo aparecieron varias veces en los debates (Tatiana Hernández)

ARGUMENTOS
para el cambio

ISSN 0717-2346

Friedrich
Ebert
Stiftung

NADA
SIN
NOSOTRAS

cem
centro de estudios de la mujer

Guardia Vieja 202 – oficina 43 • Santiago, Chile
Teléfono: +56 2275 64514 • cem@cem.cl • www.cem.cl